

LAS TOMAS DE TERRENOS Y VIVIENDAS EN SANTIAGO DE CHILE, 1978-2000*

LAND AND HOUSING OCCUPATIONS IN SANTIAGO
DE CHILE, 1978-2000

EMANUEL GIANNOTTI**, SANTIAGO BRAITHWAITE***

RESUMEN: Las ocupaciones de terrenos y viviendas, conocidas en Chile como *tomas*, han caracterizado el movimiento de pobladores desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la literatura ha señalado que, después de las protestas nacionales de 1983-1986, estas acciones se han repetido de manera más espaciada, desapareciendo paulatinamente. A través de un catastro de las tomas realizadas en Santiago entre 1978 y 2000, mostramos que estas acciones han sido más numerosas de lo que se piensa habitualmente. Por lo tanto, se pueden entender como parte de un periodo unitario de movilización por la vivienda. La continuidad histórica de esta forma de movilización a lo largo de contextos políticos muy diversos, se puede explicar porque las tomas lograron en buena medida el objetivo de los pobladores sin casa o allegados: no tanto por asentarse en un terreno como por causar un evento público y poder acceder a negociaciones con las autoridades.

PALABRAS CLAVE: Tomas, ocupaciones, pobladores, movilizaciones, vivienda.

ABSTRACT: Land and housing occupations, known in Chile as “*tomas*”, have characterized the “*pobladores*” movement since the second half of the 20th century. However, the literature indicates that, after the national protests of 1983-1986, these actions have been repeated with less frequency, and have gradually ceased. Through a protest event analysis of the occupations that took place in Santiago between 1978 and 2000, we have shown that these actions have occurred more commonly than thought. Therefore, they could be understood as a part of a unitary period of mobilization for housing. The historical continuity of this form of mobilization throughout very diverse political contexts can be explained because the “*tomas*” have largely achieved the objective of the

* Este artículo es el resultado de la investigación FONDECYT 11150589.

** Doctor en Urbanismo. Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: egiannotti@uchilefau.cl. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4855-9116>

*** Magíster en Historia. Doctorando de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: info.shago@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0078-1073>

homeless: not so much to settle on a plot of land, but rather to cause a public event, in order to start negotiation with the authorities.

KEYWORDS: Squatting, occupations, “pobladores”, mobilization, housing.

Recibido: 15.07.2020. Aceptado: 06.04.2021.

INTRODUCCIÓN

LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIOS que han tratado las ocupaciones de terrenos y viviendas realizadas por familias sin casa, conocidas en Chile como *tomas*, se ha centrado en dos períodos de intensas movilizaciones: los años sesenta y ochenta. Para el primer período, las tomas han sido leídas como una estrategia exitosa para acceder al suelo, que contribuyó a forjar la identidad de los pobladores, y alcanzó su mayor grado de masividad durante el gobierno de la Unidad Popular (Cofré, 2011, 2015; Cury, 2018; Garcés, 2002, 2015). Para el segundo periodo, aparte de contadas excepciones (Bruey, 2012), los estudios atribuyen un rol más marginal a las tomas, no obstante, estas acciones fueron recurrentes y bien documentadas. Las investigaciones se han centrado en el rol de los pobladores en las jornadas de protesta nacional de 1983-1986 (Garcés, 2017). En este contexto, algunos autores han relevado la toma como una acción radical y de ruptura, dentro de un repertorio variado de protestas en contra de la dictadura impuesta en 1973 (Campero, 1987; Espinoza, 1998; Iglesias, 2011), mientras otros le han dedicado poca atención en el análisis de las formas de organización y movilización de los pobladores (Bravo, 2017; Garcés, 2011 y 2019).

Se ha generalizado que las tomas experimentaron un reflujo después de las protestas nacionales, que habría devenido en ocaso en el periodo post-dictatorial (Sabatini y Wormald, 2004). Las dos tomas más grandes de los años noventa se han observado como eventos aislados, casi anacrónicos (Angelcos y Pérez, 2017). Tal desaparición respondería a un cambio de contexto: de una dictadura que aplicó una alta represión a las tomas, a un régimen democrático que intentó prevenir estos eventos, a través del diálogo con los comités de allegados y el fortalecimiento de los programas habitacionales (Castillo y Forray, 2014). El carácter neoliberal de las políticas de vivienda, introducido con las reformas de los últimos años setenta y mantenido en las décadas sucesivas, habría contribuido a socavar el espíritu comunitario e instalar una lógica individualista, lo cual desalentó la acción colectiva (Angelcos y Pérez, 2017; Özler, 2012; Posner, 2012). Estas dinámicas se insertaron en un periodo en el cual, según la mayoría de los

autores, los sectores populares habrían sido marginados del debate político, mientras la sociedad en su conjunto se habría desmovilizado, lo cual perduró, por lo menos, hasta los primeros años del nuevo siglo (Delamaza, 2010; Donoso & Von Bülow, 2017; Oxhorn, 1995, 2004; Paley, 2001; Palet y Coloma, 2015).

Los resultados del presente estudio entregan un cuadro distinto. Las tomas efectuadas en Santiago durante los años ochenta y noventa fueron más numerosas de lo que se piensa habitualmente y se desarrollaron de manera continua, a través de ciclos de movilización. Estas evidencias cuestionan la perspectiva desde la cual la literatura ha mirado el fenómeno. Nuestra hipótesis es que las tomas de los años ochenta no fueron solo expresión de las protestas nacionales, sino que la forma de acción más representativa de la movilización por la vivienda, la cual persistió en la década siguiente. Por lo tanto, en los 20 años considerados, se desarrolló un proceso relativamente unitario de lucha habitacional, que se fue ajustando a los distintos contextos sociales y políticos. La principal demanda de estas movilizaciones fue el acceso colectivo al derecho a la vivienda, en contradicción con las políticas habitacionales focalizadas y subsidiarias del período.

EL ESTUDIO DE LAS TOMAS COMO FORMAS DE MOVILIZACIÓN

Antes que nada, es necesario precisar lo que entendemos por *tomas*. Estas acciones han sido una forma específica de reivindicación y acceso a la vivienda de las familias sin casa, utilizada en las principales ciudades del país, que ha consistido en la ocupación de terrenos o de viviendas, que, en muchos casos, buscaron intervenir en la agenda pública, orientando sus demandas por el derecho a la vivienda hacia las instituciones estatales. Esta forma de movilización surgió desde la segunda mitad del siglo XX en Chile (Giannotti y Cofré, en prensa). A partir de entonces, la toma ha sido la acción más representativa y contundente de la lucha habitacional, caracterizada por su capacidad de desafiar la estructura institucional (Abufhele, 2019; Bruey, 2012; De Ramón, 1990; Garcés, 2013; Salazar, 1990).

Como hemos visto, es opinión compartida que las tomas habrían desaparecido en el proceso de transición a la democracia, debido al cambio de contexto político y social. En efecto, una de las principales perspectivas utilizada en los estudios sobre movimientos sociales es la de las oportunidades políticas, según la cual los factores estructurales y coyunturales

de la política influyen los procesos de movilización y desmovilización. Más precisamente, la percepción de un cambio favorable en el conjunto de oportunidades y amenazas favorecería las protestas (Tarrow, 2011; Tilly & Tarrow, 2015). Entre los factores más citados están aquellos propuestos por McAdam (1996): el nivel de apertura del sistema político, el grado de alineamiento de las élites, la presencia de aliados influyentes, y la capacidad y propensión del Estado de reprimir.

Meyer (2004) y Meyer y Minkoff (2004), criticando el enfoque de las oportunidades políticas, han evidenciado la necesidad de considerar las particularidades de los casos, ya que los factores relevantes para las protestas sociales varían según los actores en juego. En este sentido, varias investigaciones han evidenciado la heterogeneidad que caracteriza el “universo poblacional” (Castells, 1973; ver también Campero, 1987). La ponderación de esta diversidad puede mostrar una dimensión del conflicto que ha tendido a ensombrecerse en relación con los estudios que buscaron determinar la constitución de un actor político relativamente homogéneo y portador de un proyecto de transformación social (Dubet et al., 1989).

En el caso de las tomas, si bien estas se beneficiaron de contextos de movilización más amplios, como las protestas nacionales, creemos que fueron principalmente una expresión de una contienda habitacional que tuvo dinámicas propias. Esta fue protagonizada por una parte del universo poblacional, las familias sin vivienda, conocidas como *allegadas* o *sin casa*.

Si miramos las tomas como una acción de reivindicación habitacional, su continuidad a través de diferentes regímenes políticos se puede explicar porque lograron en buena medida el objetivo de los sin casa: no tanto asentarse en un terreno, sino que causar un evento público a través de una acción disruptiva. Vulnerando abiertamente el derecho a la propiedad privada, las tomas obligaron a reacciones relativamente inmediatas de las autoridades, aunque con variaciones según el contexto político.

Recordando que no es sencillo determinar el éxito de una movilización (Amenta et al., 2010; Bosi et al., 2016), y adaptando la idea de resultados directos e indirectos propuesta por Cress y Snow (2000), podemos identificar dos grupos de efectos logrados a través de las tomas. Un primer grupo de beneficios, que podemos llamar directos, conciernen a ventajas para las personas participantes, entre las cuales están: obtener el apoyo de actores influyentes, acceder a negociaciones con el Estado, conseguir una solución habitacional, acortar los tiempos de espera para ella y, solo en pocas excepciones, lograr asentarse en el terreno. Un segundo grupo de efectos, que podemos llamar indirectos, ha beneficiado a los sin casa en general: el re-

conocimiento público, la inserción de las demandas habitacionales en la agenda política nacional, y el cambio de las políticas de vivienda.

Para la presente investigación, adoptamos una estrategia metodológica bastante consolidada en los estudios sobre movilización: el análisis de los eventos de protesta (Fillieule, 2007; Joignant et al., 2020; Tilly & Tarrow, 2015). A través de una revisión de prensa y fuentes secundarias, construimos una serie homogénea de acontecimientos, los cuales fueron organizados en un catastro y analizados a través de las siguientes variables: la ubicación, el tipo de lugar tomado, los actores participantes, las demandas levantadas, el nivel de represión, la existencia de negociaciones y la obtención de beneficios. En una segunda fase, se procedió a contrastar las dinámicas identificadas con el contexto social y político. Para el análisis complementamos los factores propuestos por McAdam (1996) con factores específicos al problema habitacional y las políticas de vivienda.

Es necesario alertar que las dinámicas propias de las tomas hacen difícil capturar ciertos datos. Además, son conocidos los sesgos derivados del uso de la prensa, lo cual obliga a tomar cautela en la lectura de las informaciones (Fillieule, 2007; Joignant et al., 2020). Por lo tanto, hemos intentado verificar y cruzar los datos periodísticos entre sí y con fuentes secundarias. Estas son bastante escasas, con la excepción de la primera mitad de los años ochenta, periodo en el cual se realizaron catastros de eventos de este tipo (Morales y Rojas, 1986; Rosenmann et al., 2016), además de existir estudios y periódicos atentos al fenómeno, como *Hechos Urbanos*.

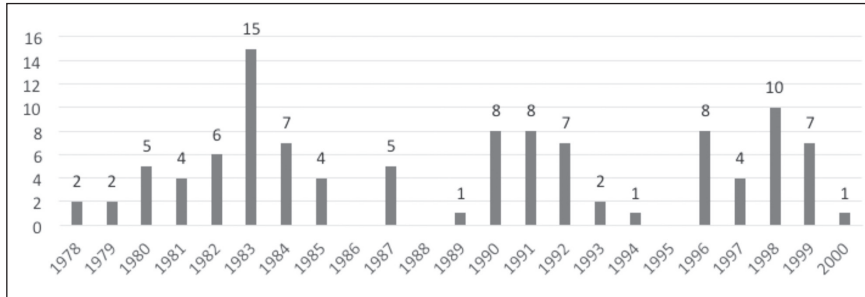
LAS DINÁMICAS DE LA CONTIENDA HABITACIONAL ENTRE 1978 Y 2000

Las tomas y, más en general, la movilización por la vivienda, presentan varios elementos constantes entre 1978 y 2000, que permiten analizar el periodo como un proceso relativamente unitario de lucha habitacional. Dentro de este proceso es posible identificar tres ciclos, en los cuales las dinámicas han ido ajustándose al contexto. Con ciclo de protesta entendemos una fase transgresiva dentro de la contienda (McAdam et al., 2001), caracterizado por la intensificación de las movilizaciones y de la impugnación al sistema político (Tarrow, 2011).

Este patrón se puede observar claramente en los resultados del catastro de tomas. El gráfico 1 muestra que las 108 tomas que pudimos identificar se distribuyen de manera bastante homogénea en el periodo, aunque se

observan años con mayor movilización, donde destaca el 1983, y otros de reflujo, lo cual conforma los tres ciclos mencionados.

Gráfico 1. Tomas realizadas en Santiago: número de eventos por año.



Fuente: Elaboración propia en base a revisión de prensa y fuentes secundarias.

Para analizar el periodo en estudio, es necesario señalar algunos factores relevantes, que cruzaron los tres ciclos de protesta.

Un primer factor a considerar es el déficit de vivienda, que fue una causa estructural de la contienda. Utilizando los resultados del censo de 1982, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) estimó un déficit nacional de cerca de 752 mil viviendas. La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) estimó que existían alrededor de 918 mil hogares allegados en 1990, que descendieron a 743 mil en el año 2000. Si bien distintas fuentes entregan números disímiles, los datos demuestran una constante falta de vivienda y una persistencia del allegamiento. Este último fenómeno comenzó a ser un tema central en el debate a principio de los años ochenta. El número de allegados había crecido sostenidamente en los años anteriores, por el sensible decremento en la construcción de viviendas y por el estricto control sobre las ocupaciones, impuesto por la dictadura (Rojas, 1984).

Un segundo factor importante fue la revisión profunda de las políticas habitacionales, sumada a la restructuración de Santiago, producto de las erradicaciones de campamentos (Morales y Rojas, 1986). Desde fines de los años setenta, adoptando una perspectiva neoliberal, los programas de viviendas fueron focalizados hacia los sectores de extrema pobreza. El rol del Estado fue reducido, pero el compromiso público con el proble-

ma habitacional no desapareció del todo. A partir de 1983, cuando asumió como ministro de Vivienda Modesto Collados, representante de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizaron ajustes relevantes a las políticas, que contribuyeron a incrementar el número de viviendas construidas (Rojas, 2019), lo cual asumió un importante aspecto político a medida que se acercaba el plebiscito de 1988 (Álvarez, 2012). Los gobiernos de la Concertación mantuvieron los rasgos fundamentales de las políticas anteriores, dándole aún más importancia e incrementando el número de unidades realizadas (Sugranyes, 2005). Los resultados obtenidos fueron leídos como exitosos, pero, hacia fines de los noventa, la política habitacional comenzó a ser fuertemente criticada (Ducci, 1997; Rodríguez & Sugranyes, 2004).

Un tercer factor relevante tiene que ver con los protagonistas de la contienda por la vivienda, que fueron los sin casa. Su principal instrumento de asociación fueron los comités de vivienda o de allegados, que a veces se coordinaron a nivel comunal o metropolitano, aunque estas organizaciones tuvieron escasa estabilidad en el tiempo (Gallardo, 1986; Scherman, 1990; Wilson, 1988). Las familias repitieron constantemente algunas formas de movilización: presentación de pliegos reivindicativos, huelgas de hambre, cortes de calle, tomas de embajadas, manifestaciones frente a edificios públicos y tomas de terrenos o departamentos. Estas tuvieron en su base una demanda que, desde décadas, era fuertemente instalada en la sociedad chilena: el derecho a una vivienda digna (Angelcos, 2016; Murphy, 2015). Tal reivindicación ha quedado representada en la constante instalación de la bandera nacional en las tomas.

Una última dimensión importante es la relación entre el sistema político y los pobladores. A través de sus movilizaciones, durante la dictadura y los primeros gobiernos de la Concertación, los comités de allegados buscaron generar interlocución con instituciones como el Ministerio de Vivienda (MINVU), los municipios y la intendencia. Además, orientaron parte de sus esfuerzos a establecer alianzas con otros sectores, como la Iglesia Católica, los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Estos actores brindaron un considerable apoyo a los sin casa durante la dictadura, pero desaparecieron paulatinamente en la transición a la democracia. Por parte del Estado, podemos observar una persistente búsqueda por coartar estas movilizaciones, a través de la represión y la negociación. Si bien en dictadura esta última fue muy limitada y la represión muy violenta, también en la transición la amplia mayoría de las tomas fue desalojada.

LAS TOMAS EN DICTADURA (1978-1985)

Un primer ciclo de movilizaciones por la vivienda surgió dentro de un proceso más amplio de reorganización de los pobladores, cuyo tejido social había sido desarticulado por la represión que desató el golpe de Estado de 1973 (Bruey, 2007; Garcés, 2019; Iglesias, 2011; Valdés, 1986). Entre otros tipos de organizaciones que surgieron al amparo de la Iglesia Católica, se crearon comités de vivienda, que comenzaron a demandar terrenos urbanizados (Gallardo, 1986; Wilson, 1988). En este contexto, las tomas reaparecieron a fines de los años setenta (Bruey, 2012; Campero, 1987). Encontramos registros de prensa de ocupaciones fugaces de departamentos en 1978, y de tomas de sitios en campamentos en 1979 y marzo y junio de 1980. Estos eventos, todos terminados en desalojos causaron alerta en las autoridades (Vial, 1980). Sin embargo, fue la toma realizada el 22 de julio de 1980 la que instaló de forma pública el problema habitacional de los allegados, abriendo un ciclo de movilizaciones sostenidas.

Un centenar de familias ocupó una cancha en la población La Bandera de La Granja. Tras ser desalojadas por Carabineros, estas buscaron refugio en una capilla, donde se instalaron, recibiendo el apoyo de la Iglesia (*El Mercurio*, 30 de julio de 1978, p. 1C; De Arteagabeitia, 1980). El evento causó la reacción de las autoridades, que declararon que las tomas no serían aceptadas y quienes lo hicieran se exponían a las consecuencias legales. Agregaron que el gobierno no tenía obligación de dar casa, aunque entregaba ayuda con un papel subsidiario. Por último, hicieron un llamado a los pobladores para que no se dejaran instigar a participar en organizaciones no reconocidas por la ley, como los “Comités sin Casa” (Wilson, 1988). Días después, ex autoridades del MINVU, vinculadas a la Democracia Cristiana, apoyaron públicamente a los allegados (*El Mercurio*, 1 de agosto de 1980, p. 3C). Estos siguieron movilizándose. Comenzaron una huelga de hambre y, por unas horas, tomaron la embajada de España (*La Tercera*, 25 de agosto de 1980, p. 6; *Las Últimas Noticias*, 9 de septiembre de 1980, p. 16). En sus declaraciones, los pobladores resaltaron la imposibilidad de cumplir con el ahorro exigido para la postulación a los programas habitacionales y demandaban soluciones.

Cerca de medio año después, este campamento se disgregaba. Alrededor de 70 familias aceptaron una solución parcial ofrecida por el Municipio de La Granja, afectando la organización interna de la agrupación (Segovia y Torres, 1984). Mientras tanto, ocurrieron nuevas ocupaciones. Entre 1981 y 1982 se realizaron diez tomas, con una tendencia al crecimiento de la canti-

dad de familias involucradas. También el conflicto fue aumentando. En una de ellas, las 200 familias que habían ocupado una cancha en la población Santa Anita en Pudahuel intentaron resistir a la represión policial, generando enfrentamientos en el sector (*Hechos Urbanos*, octubre de 1983, pp. 4-5). Mientras la crisis económica comenzaba a golpear el país, con efectos dramáticos en los sectores populares, la reivindicación habitacional de los allegados se estaba consolidando. Se fortalecieron también las organizaciones de estos, las cuales, en múltiples instancias, reivindicaron la vivienda como un derecho, en contraposición al discurso de las autoridades, que enfatizaba el esfuerzo individual (Campero, 1987; Wilson, 1988).

Dos tomas de terrenos en la comuna de San Miguel, realizadas en julio y noviembre de 1982, por allegados de La Victoria y La Legua, se vincularon al Partido Comunista y derivaron en protestas a nivel local (Reyes, 2014). De tal manera, comenzó a visibilizarse un cruce dialéctico entre las movilizaciones de los allegados y las estrategias de oposición al régimen. Estas últimas se consolidaron en 1983, a partir del desarrollo de las protestas nacionales, cuando se comenzaron a formular propuestas para el fin de la dictadura (Garcés, 2019). Las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad provocaron un cambio en la coyuntura política, favoreciendo las tomas.

A principios de 1983, antes de la primera jornada de protesta nacional, se realizaron tres ocupaciones. A partir de agosto, las tomas comenzaron a multiplicarse. Entre ellas destacó la del 22 de septiembre, en la cual se formaron los campamentos Cardenal Silva Henríquez y Monseñor Francisco Fresno, en La Granja. La consolidación de estos campamentos, en donde se albergaron miles de familias, puso en movimiento una amplia red de contactos, solidaridades y alianzas. El gobierno, imposibilitado de desalojar tal cantidad de personas, puso en marcha una serie de otras medidas represivas (Iglesias, 2011; Pérez, 1995; Rojas, 1984). El evento generó un debate que se prolongó por meses y alimentó las expectativas de las familias allegadas, las cuales impulsaron nuevas ocupaciones.

Después de la toma en La Granja, se realizaron otras seis ocupaciones en los últimos meses de 1983 y siete en 1984, las que fueron todas desalojadas. Las autoridades denunciaron planes de agitación subversiva (*La Tercera*, 10 de mayo de 1984, p. 7), a la vez que la prensa oficialista destacaba los logros del MINVU (*La Nación*, 14 de mayo de 1984, p. 3). La represión subió de intensidad. Dos tomas de departamentos en construcción, en mayo y julio de 1984 fueron especialmente conflictivas, al tratarse de conjuntos que ya tenían asignados a sus habitantes. El episodio más violento fue a final de

septiembre de 1984, cuando unas 600 personas intentaron ocupar el fundo San Luis, en el sector del Cerro La Virgen de Puente Alto. El comité de allegados, que estaba federado a la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, organización vinculada al Partido Comunista, demostró altos grados de preparación. Sin embargo, la toma terminó en una feroz represión. El poblador Iván Córdova fue asesinado a balazos y el dirigente poblacional y militante comunista Julio Valencia fue asesinado con un corvo, ambos a manos de Carabineros (*La Segunda*, 28 de septiembre de 1985, pp. 12-14).

Pese a que se realizaron otros intentos de ocupaciones en 1985 y 1987, los eventos de Puente Alto marcaron el cierre de este ciclo de movilización. La débil apertura que la dictadura había propiciado durante las primeras protestas nacionales cedió el paso a un aumento de la represión, sobre todo a partir del estado de sitio decretado en noviembre de 1984 (Valdés, 1986). Con respecto a las dinámicas específicas de las contiendas por la vivienda, por un lado, las autoridades negaron constantemente la interlocución con los allegados y descalificaron las tomas como eventos ilegítimos, reprimiéndolas cada vez más violentamente. Por otro lado, desde 1983, el gobierno hizo modificaciones a las políticas habitacionales, para aumentar las viviendas construidas y focalizar mejor los programas (Bruey, 2012; Rojas, 2019). Todo esto, probablemente, cambió la percepción de las familias sin casa respecto de los costos asociados a las tomas.

No obstante la dura represión y la negativa de la dictadura a dialogar, la movilización por la vivienda tuvo algunos logros. A través de las acciones más disruptivas, con las cuales se apeló al derecho a la vivienda, los allegados instalaron en la agenda pública su problema habitacional y lograron el apoyo de otros actores, como la Iglesia Católica y la oposición.

LAS TOMAS EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1989-1994)

Entre 1989 y 1994 se desarrolló un nuevo ciclo de movilizaciones por la vivienda, en el contexto de la transición a la democracia. En octubre de 1988, la victoria del NO en el plebiscito determinó la convocación de elecciones para finales de 1989, que fueron ganadas por la Concertación de Partidos por la Democracia.

El 17 de julio de 1989, alrededor de mil pobladores de la zona sur, agrupados en la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, hicieron ingreso a las obras de la población Salvador Dalí en La Pintana. Los allegados, que buscaban generar presión para negociar, fueron reprimidos. En los enfren-

tamientos dos pobladores fueron heridos a bala y una pobladora falleció (*La Época*, 17 de julio de 1989, pp. 1 y 13-14). La toma causó un fuerte debate público, que incluyó acusaciones cruzadas entre las autoridades de la dictadura, el proscrito Partido Comunista y los líderes de la Concertación. El candidato a la presidencia Patricio Aylwin realizó un solemne llamado a la paciencia de los allegados (*La Época*, 19 de julio de 1989, p. 13).

A comienzos de 1990, a menos de un mes de la asunción presidencial de Aylwin, se realizaron nuevas ocupaciones, todas las cuales fueron reprimidas. En diez días, cuatro terrenos fueron tomados por familias de allegados (*La Segunda*, 13 de febrero de 1990, p. 13; *La Época*, 14 de febrero de 1990, p. 15; *El Mercurio*, 15 de febrero de 1990, pp. 1A y 12A). La inminente vuelta a la democracia, probablemente, creó un clima más favorable para la contienda de la vivienda. Sin embargo, el naciente gobierno de Aylwin fue fuertemente tensionado por los poderes mantenidos por Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército: la contención de los conflictos social fue una prioridad para el nuevo gobierno, en consideración con las adversidades que ya encontraba en otros grupos sociales como el Ejército.

La política habitacional fue uno de los mecanismos de contención. Por un lado, se aumentó la construcción de viviendas, que alcanzó las 70 mil anuales (Rodríguez y Sugranyes, 2004). No obstante, los avances de los programas habitacionales apenas lograban contener la explosión de los allegados, que alcanzaba entre 800 mil a 900 mil familias hacia 1990 (MacDonald, 1989). Por otro lado, el gobierno reconoció como interlocutores, de forma parcial, a los dirigentes de los comités. Entre otras cosas, modificó el Programa de Vivienda Básica, para permitir la postulación colectiva y favorecer a los comités de vivienda (Díaz, 1997). De tal manera, el Estado propuso la organización de una *fila* y de *tiempos de espera* como forma de contención de la demanda.

Esto produjo un cambio en el desarrollo de las reivindicaciones habitacionales de los pobladores, los cuales, en un primer momento, mostraron una cierta confianza. Sin embargo, rápidamente surgieron insatisfacciones y críticas (Seguel, 2015). Gran parte de las tomas que se organizaron entre 1990 y 1992, tuvo directa relación con los tiempos de espera y los cupos de viviendas disponibles en los proyectos del MINVU. En agosto de 1990 se realizaron tres tomas en el sector de la población Las Acacias, en La Cisterna, donde los pobladores exigieron que se integrara a sus familias en los planes habitacionales del gobierno y se comprara un terreno dentro de la comuna (*La Época*, 6 de agosto de 1990, p. 22). En 1991, en las tomas de viviendas de la Villa Brasilia en Estación Central y de la población Lo Sierra

II en Lo Espejo, se repitió esta demanda: que las viviendas que se encontraban en construcción fueran asignadas a allegados de esas comunas (*La Segunda*, 12 de julio de 1991, p. 7; *El Mercurio*, 26 de septiembre de 1991, p. 6C). En todas las tomas hubo intermediación de autoridades, que propusieron mesas de trabajo posteriores, tras sus desalojos.

Desde fines de 1991 hasta mediados de 1992 las movilizaciones se intensificaron, tanto en la cantidad de participantes, como por las estrategias que desarrollaron los allegados. En la primavera de 1991, se realizaron tres tomas: dos en La Pintana, que sumaron alrededor de 150 familias, y la primera toma de terrenos organizada por la Coordinadora Comunal de Allegados de Peñalolén, que, en este periodo, tuvo un rol destacado en la reivindicación habitacional.

El 7 de noviembre, alrededor de 350 familias, organizadas en dicha Coordinadora, se tomaron el terreno que venían gestionando hacía cerca de un año. Exigían la entrega inmediata del subsidio que permitía su adquisición. La toma duró hasta el 12 de noviembre, día en que se informó la transferencia de los subsidios. Pese a que el Ministro de Vivienda, Fernando Etchegaray, había declarado que “ninguna acción de presión como ésta puede acelerar el trabajo computacional de selección en el otorgamiento de subsidios” (*La Tercera*, 5 de noviembre de 1991, p. 13), la toma de terrenos demostró lo contrario.

Esta experiencia fue la base para la toma más importante del ciclo: la Esperanza Andina. El 19 de julio de 1992 a las seis de la mañana, alrededor de 900 familias ocuparon el terreno de propiedad de Filomena Narváez. La demanda de los pobladores era la venta de este por medio del financiamiento de los subsidios que ya poseían. En pocos meses se llegó a un acuerdo entre las autoridades y la propietaria. Sin embargo, el desconocimiento del compromiso por parte de Narváez desencadenó una lucha que se arrastró por varios años, la cual incluyó la toma de la Municipalidad, huelgas de hambre y una emblemática marcha desde Santiago hasta el Congreso Nacional en Valparaíso (Flores, 1994; Salas, 1999; Valenzuela, 2018).

Luego de esta ocupación, podemos observar una tendencia a la disminución de la movilización de los pobladores. Entre julio de 1992 y fines de 1994, se realizaron solo cuatro tomas. El problema de la vivienda de los allegados comenzó a desaparecer del debate público. Durante este ciclo, en relación al anterior, los aliados de los pobladores se transformaron: la Iglesia Católica abandonó el trabajo comunitario, gran parte de los medios de comunicación de oposición a la dictadura desaparecieron (Araya, 2006), las organizaciones no gubernamentales perdieron su financiamiento y sus tra-

bajadores más destacados se incorporaron al gobierno (Gruninger, 2003), y los partidos de izquierda atravesaron una crisis paradigmática (Álvarez, 2019). Solo podemos observar sus silencios y omisiones en comparación con el ciclo anterior, ya que, salvo excepciones marginales, estos actores no intervinieron en las movilizaciones. En el régimen político transicional, los partidos de gobierno, que en los años ochenta habían solidarizado con las ocupaciones, mostraron un discurso cada vez más crítico con esta forma de movilización social.

LAS ÚLTIMAS TOMAS DEL SIGLO (1995-2000)

El tercer ciclo de protestas de las familias allegadas se desarrolló en medio de una coyuntura económica conocida como crisis asiática, que volvió a incrementar los índices de cesantía y pobreza. Durante este período, de acuerdo a las memorias del MINVU, las tasas de construcción de viviendas comenzaron a bajar. Según la encuesta CASEN, el déficit habitacional se mantuvo prácticamente sin variaciones y las políticas habitacionales no fueron modificadas. Entre 1995 y 2000, se registraron 30 tomas de terrenos y viviendas, 10 de las cuales se concentraron en 1998.

Un primer foco de conflicto se desarrolló en Huechuraba, entre fines de 1995 y comienzos de 1996, cuando se hicieron dos tomas de terrenos que formaron los campamentos Poema 20 y Poema 21 (*La Tercera*, 9 de febrero de 1996, p. 3). Unos meses más tarde, en la misma comuna, el Comité de Allegados Jesús Obrero realizó su primera toma, para pedir al municipio que “les diera una mano”, como señaló uno de sus integrantes (*La Segunda*, 6 de noviembre de 1996, p. 9). Las familias estaban organizadas y contaban con los ahorros suficientes para postular a los programas habitacionales. Con ello se inició un proceso de movilización, que se consolidó en la formación del campamento Jesús Obrero. Considerando que durante 1996 no se terminaron ni ejecutaron viviendas sociales en Huechuraba, como consigna la memoria del MINVU, las tomas resultaron ser la forma más eficiente de acceder a una vivienda para estas familias, ya que lograron instalar tres campamentos en alrededor de un año, donde vivieron cerca de 250 familias.

En San Bernardo, la agrupación Toma André Jarlan también desarrolló un proceso exitoso de movilización, que conllevó dos tomas de terrenos y dos ocupaciones de la Municipalidad de esta comuna entre 1997 y 1998. Estas movilizaciones abrieron un flanco de disputa, que permitió a los po-

bladores negociar directamente con el alcalde de la comuna y con autoridades del MINVU. Finalmente, les fueron asegurados cupos en una nueva población de San Bernardo (*La Tercera*, 8 de agosto de 1998, p. 21).

El invierno de 1997 trajo consigo la grave denuncia de las familias de las poblaciones El Volcán I y II de Puente Alto, sobre las fallas estructurales de las viviendas que habían recibido en marzo del año anterior. Este fue el inicio de un escándalo, que arrastró a la renuncia al Ministro de Vivienda Edmundo Hermosilla y la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Sus resultados preliminares anunciaron que, de 224.224 viviendas básicas construidas durante el período, 43.865 presentaban problemas graves (Portela, 2006; Seguel, 2015).

Desde julio de 1997, parte significativa de las familias afectadas optó por abandonar los departamentos de El Volcán. Durante las semanas siguientes se provocaron una serie de tomas de estos departamentos (*La Nación*, 29 de julio de 1997, p. 12; *La Nación*, 30 de julio de 1997, p. 14). En el primer semestre de 1998, las tomas se extendieron a las recién asignadas viviendas de El Volcán III, también construidas por la empresa COPEVA. A fines de 1998, 340 familias tomaron un terreno en el cercano basural La Cañamera y formaron el campamento Carlos Oviedo que, años después, fue erradicado a los departamentos de El Volcán.

Las ocupaciones en El Volcán fueron realizadas por pequeños grupos, progresivamente y sin organización previa. Por lo tanto, no constituyeron una demanda reivindicativa en lo inmediato, aunque crearon una situación sumamente conflictiva, que se prolongó por años. En el mismo periodo, se realizaron otras tomas de viviendas en conjuntos habitacionales en construcción. Estas estuvieron orientadas a crear un hecho público, para denunciar las demoras de los programas habitacionales y demandar prioridad en la asignación de los conjuntos realizados en las respectivas comunas. A menudo se logró abrir negociaciones, aunque estos eventos fueron cada vez más conflictivos, alcanzando el punto más álgido en las ocupaciones de la población José Donoso, desalojadas por Carabineros (*La Tercera*, 15 de octubre de 1988, p. 6; *La Segunda*, 15 de octubre de 1998, p. 43).

Por último, cabe mencionar, aunque sea escuetamente, el impacto de la toma de Peñalolén en este ciclo de movilizaciones. En junio de 1999, cerca de 1.200 familias, mayoritariamente procedentes de la misma comuna, se tomaron un predio del empresario Miguel Nazur. Esta ocupación representa el punto de mayor intensificación de este ciclo de movilizaciones, por la amplia capacidad de organización que tuvieron los pobladores para negociar con el Estado, mientras desarrollaban innovadoras formas

de organización local. Este campamento perduró largos años, hasta que en 2004 comenzó su proceso de erradicación que involucró la mayoría de los ocupantes, aunque una minoría quedó en el campamento (Yañez, 2014).

Hacia fines de 1999 y comienzos del nuevo milenio, se realizaron las dos últimas tomas de terrenos del ciclo que estamos analizando. El gobierno comenzó a tomar medidas para contener las ocupaciones y, por otro lado, contempló una reforma a las políticas de viviendas. Las movilizaciones de los pobladores, junto a los escándalos, habían reinstalado públicamente el grave problema habitacional de los sectores populares, destacando la necesidad de una mejor calidad de las viviendas y una buena ubicación de los conjuntos (Castillo y Forray, 2014).

CONCLUSIONES

En Santiago de Chile, durante las dos últimas décadas del siglo XX, las ocupaciones de terrenos y viviendas han sido una estrategia constantemente utilizada por los pobladores allegados. Por lo tanto, contrariamente a la interpretación común, la toma no fue solamente una acción que hizo parte de las protestas nacionales, para luego desaparecer, sino que una forma de movilización que se ha desarrollado de manera continua, durante los años ochenta y los primeros gobiernos de la Concertación. Este movimiento de reivindicación habitacional, cuya principal demanda ha sido el acceso colectivo a la vivienda, ha tenido dinámicas propias, y en parte autónomas, respecto a otras movilizaciones del universo poblacional, o de otros sectores sociales.

El continuo recurso a las tomas por parte de los sin casa se puede explicar porque estas acciones demostraron ser efectivas para interpelar a las autoridades y desafiar el sistema institucional. En tal sentido, el objetivo principal no ha sido conseguir un terreno para construir una vivienda y un barrio de manera autónoma, sino que, principalmente, acceder a negociaciones y denunciar públicamente el problema habitacional. De esta manera, los allegados han logrado beneficios directos e indirectos, que han variado con los cambios del contexto político y con las consecuentes transformaciones de los actores en juego y de las dinámicas de interacción.

Esta lectura no pone en duda la capacidad de los sectores populares de constituirse como un actor político, todo lo contrario: evidencia la complejidad y diversidad de sus formas de movilización y destaca la capacidad que los pobladores tuvieron para desarrollar un movimiento sostenido de

reivindicación habitacional. Esta capacidad, que ha sido bastante mayor de lo que normalmente se piensa para los años ochenta y noventa, ofrece una perspectiva distinta desde la cual leer los cambios de las políticas de vivienda, el proceso de formación de la periferia de Santiago y, más en general, el rol de los sectores populares urbanos en la dictadura militar y la transición a la democracia. En este sentido, hay, por lo menos, dos preguntas que quedan abiertas.

Por un lado, sería necesario profundizar en la relación entre las dinámicas de organización y movilización de los pobladores y las políticas habitacionales. Creemos que los ciclos de movilización que hemos analizado se caracterizaron por una constante crítica a la política habitacional subsidiaria, focalizada e individualista, pero ¿en qué medida y cómo las movilizaciones lograron transformar dichas políticas? Por otro lado, los trabajos que han investigado la lucha habitacional en las primeras dos décadas del siglo XXI, para la cual se ha hablado de resurgimiento del movimiento de pobladores, se han enfocado principalmente en algunas experiencias emblemáticas. Además de ser deseable una perspectiva más amplia en la cual emplazar tales experiencias, sería interesante estudiar cómo las movilizaciones y las organizaciones de los años ochenta y noventa se han articulado con las de los últimos años, analizando rupturas y continuidades.

REFERENCIAS

- Abufhele, V. (2019). La política de la pobreza y el gobierno de los asentamientos informales en Chile. *EURE* 45(135), 49-69.
- Álvarez, R. (2012). Las casas de Pinochet: políticas habitacionales y apoyo popular 1979-1988. En V. Valdivia, R. Álvarez y K. Donoso. *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista* (pp. 117-148). Santiago: Lom.
- Álvarez, R. (2019). *Hijas e hijos de la rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000)*. Santiago: Lom.
- Amenta, E., Caren, N., Chiarello, E., & Su, Y. (2010). The political consequences of social movements. *Annual Review of Sociology* 36, 287-307.
- Angelcos, N. (2016). Movimiento de pobladores. Lucha social y política en el Chile contemporáneo. *Educação em Perspectiva* 7(2), 324-345.
- Angelcos, N. y Pérez, M. (2017). De la “desaparición” a la reemergencia: continuidades y rupturas del movimiento de pobladores en Chile. *Latin American Research Review* 52(1), 94-109.
- Araya, F. (2006). *Historia de la revista APSI. El que ríe se va al cuartel (pico para Pinochet)*. Santiago: Lom.

- Bosi, L., Giugni, M., & Uba, K. (2016). *The consequences of social movements. Taking stock and looking forward*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bravo, V. (2017). *Piedras, barricadas y cacerolas. Las jornadas nacionales de protesta. Chile 1983-1986*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Bruey, A. (2007). *Organizing community: defying dictatorship in working-class Santiago de Chile, 1973-1983*. [Tesis de doctorado]. Yale University.
- Bruey, A. (2012). Limitless land and the redefinition of rights: popular mobilization and the limits of neoliberalism in Chile, 1973-1985. *Journal of Latin American Studies* 44(3), 523-552.
- Campero, G. (1987). *Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago*. Santiago: Ediciones ILET.
- Castells, M. (1973). Movimiento de pobladores y lucha de clase en Chile. *EURE* 3(7), 9-35.
- Castillo, M. J., y Forray, R. (2014). La vivienda, un problema de acceso al suelo. *ARQ*, 86, 48-57.
- Cofré, B. (2011). El movimiento de pobladores en el Gran Santiago: las tomas de sitios y organizaciones en los campamentos. 1970-1973. *Tiempo histórico*, 2, 133-157.
- Cofré, B. (2015). "El sueño de la casa propia". *Estado, empresarios y trabajadores ante el problema de la vivienda y urbanización residencial. Santiago de Chile, 1952-1973*. [Tesis de Doctorado]. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Cress, D., & Snow, D. (2000). The outcomes of homeless mobilization: the influence of organization, disruption, political mediation, and framing. *American Journal of Sociology*, 105(4), 1063-1104.
- Cury, M. (2018). *El protagonismo popular chileno. Experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo (1964-1973)*. Santiago: Lom.
- De Arteagabeitia, R. (1980, septiembre). La esperanza de la vivienda. *Mensaje*, 292, 469-471.
- De Ramón, A. (1990). La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile. 1920-1970. *EURE* 16(50), 5-17.
- Delamaza, G. (2010). La disputa por la participación en la democracia elitista chilena, *Latin American Research Review*, 45, 274-297.
- Díaz, F. (1997). *Mitos y hechos del Programa de Vivienda Básica en Santiago de Chile: una mirada desde los beneficiarios*. [Tesis de Magíster]. Universidad de Chile.
- Donoso, S. & von Bülow, M. (eds.). (2017). *Social Movements in Chile. Organization, trajectories & political consequences*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dubet, F., Tironi, E., Espinoza, V., et Valenzuela, E. (1989). *Pobladores: luttés sociales et démocratie au Chili*. Paris: L'Harmattan.
- Ducci, M. E. (1997). Chile: el lado oscuro de una política de vivienda exitosa. *EURE* 23(69), 99-115.
- Espinoza, V. (1998). Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987. *EURE* 24(72), 71-84.

- Fillieule, O. (2007). On n'y voit rien. Le recours aux sources de presse pour l'analyse des mobilisations protestataires. En P. Favre (ed.), *Latelier du politiste. Théories, actions, représentations* (pp. 215-240). Paris: La Découverte.
- Flores, J. L. (1994). *Campamento La Esperanza. Recuperando el derecho a soñar, 1992-1993*. Santiago: Taller de Acción Cultural.
- Gallardo, B. (1986). *Partidos políticos y organizaciones poblaciones II: el caso de un comité de vivienda* (Documento de trabajo n° 310). FLACSO.
- Garcés, M. (2002). *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago: Lom.
- Garcés, A. (2011). *Los rostros de la protesta. Actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar (1983-1986)*. [Tesis de licenciatura]. Universidad de Santiago de Chile.
- Garcés, M. (2013). Las luchas urbanas en Chile en el último tercio del siglo XX. *Trashumante*, 1, 74-95.
- Garcés, M. (2015). El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973. *Atenea*, 512, 33-47.
- Garcés, M. (2017). Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales. *Historia* 396 7(1), 119-148.
- Garcés, M. (2019). *Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)*. Santiago: Lom.
- Giannotti, E. y Cofré, B. (2021). La invención de la toma, o cómo se transformaron las ocupaciones de terrenos en Santiago de Chile entre 1945 y 1957. *Historia* 54(1), 107-150.
- Gruninger, S. (2003). Las ONGs durante la transición chilena: un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal. *Revista Mad*, 9, 77-181.
- Iglesias, M. (2011). *Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la dictadura*. Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile.
- Joignant, A., Somma, N., Garretón, M., & Campos, T. (eds.). (2020). *Informe anual. Observatorio de conflictos 2020*. COES.
- McAdam, D. (1996). Conceptual origins, current problems, future directions. En D. McAdam, J. McCarthy, & M. Zald (eds.). *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structures, and Cultural Framings* (pp. 23-40). Cambridge: Cambridge Universities Press.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly. C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MacDonald, J. (1989). *La vivienda en Chile, hoy*. Corporación Promoción Universitaria.
- Meyer, D. (2004). Protest and political opportunities. *Revista Annual de Sociología*, 30, 125-145.
- Meyer, D., & Minkoff, D. (2004). Conceptualizing political opportunity. *Social forces* 82(4), 1457-1492.
- Morales, E., y Rojas, S. (1986). *Relocalización socio-espacial de la pobreza: Po-*

- lítica estatal y presión popular, 1979-1985* (Documento de trabajo n° 280). FLACSO.
- Murphy, E. (2015). *For a proper home: housing rights in the margins of urban Chile, 1960-2010*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Oxhorn, P. (1995). *Organizing civil society: the popular sectors and the struggle for democracy in Chile*. Pennsylvania: University Park.
- Oxhorn, P. (2004). La paradoja del gobierno autoritario: organización de los sectores populares en los ochenta y promesa de inclusión. *Política*, 43, 57-83.
- Özler, I. (2012). The Concertación y homeless in Chile. Market-based housing policies and limited popular participation. *Latin American Perspectives* 39(4), 53-70.
- Paley, J. (2001). *Marketing democracy. Power and social movements in post-dictatorship Chile*. Berkeley: University of California Press.
- Pérez, M. A. (1995). *Almendro II: desde tus raíces ausentes hasta las voces de tus puertas. Memorias del campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez y de la población Almendro II*. [Tesis de licenciatura]. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Portela, D. (2006). *El Volcán: etnografía de un ghetto en Santiago. Identidad, capital social y control cultural en la vivienda social*. [Tesis de licenciatura]. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Palet, A. y Coloma, M. (2015). Informe de Desarrollo Humano en Chile. *Los tiempos de la politización*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Posner, P. (2012). Targeted assistance and social capital: housing policy in Chile's neoliberal democracy. *International Journal of Urban and Regional Research* 36(1), 49-70.
- Reyes, J. (2014). El Partido Comunista de Chile y las tomas de terreno bajo la dictadura: los “combates” por la vivienda, 1980-1984. *Historia social y de las mentalidades* 18(1), 183-212.
- Rodríguez, A. y Sugranyes, A. (2004). El problema de vivienda de los “con techo”. *EURE* 20(91), 53-65.
- Rojas, J. (2019). *Housing by market. La mercantilización de la vivienda social chilena durante el régimen pinochetista*. [Tesis de licenciatura]. Universidad de Chile.
- Rojas, S. (1984). *Políticas de erradicación y radicación de campamentos. 1982-1984. Discursos, logros y problemas* (Documento de trabajo n° 215). FLACSO.
- Rosenmann, I., Valencia, M., y Olguín, R. (2016). La ciudad invisible: tomas de terreno en Santiago de Chile. 1973-1985. Un escrito revisitado. *Revista Diseño Urbano & Paisaje*, 31, 30-42.
- Sabatini, F. y Wormald, G. (2004). La guerra de la basura de Santiago: desde el derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. *EURE* 30(91), 67-86. Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004009100005>

- Salas, V. (1999). *Una noche, un pensamiento, una toma: una población libertaria*. Santiago: Taller de Acción Cultural.
- Salazar, G. (1990). *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)*. Santiago: SUR.
- Segovia O., y Torres, J. (1984). *Los sin casa bajo el régimen militar: proceso de lucha del comité 22 de julio*. Santiago: Programa Urbano SUR.
- Scherman, J. (1990). *Techo y abrigo. Las organizaciones populares de vivienda: Chile, 1974-1988*. Santiago: Programa de Economía de Trabajo.
- Seguel, F. (2015). *Ciudad en post-dictadura: políticas públicas de vivienda y urbanización en Santiago. 1990-2000*. [Tesis de magíster]. Universidad de Santiago de Chile.
- Sugranyes, A. (2005) La política habitacional en Chile, 1980-2000: un éxito liberal para dar techo a los pobres. En A. Rodríguez y A. Sugranyes (eds.). *Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social* (pp. 23-58). SUR.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Valdés, T. (1986). *El movimiento poblacional: la recomposición de las solidaridades sociales* (Documento de trabajo n° 283). FLACSO.
- Valenzuela, C. (2018). *Las estrategias de movilización de pobladores por la vivienda y más allá de la vivienda. El caso de Esperanza Andina en Peñalolén, Santiago (1992-1998)*. [Tesis de doctorado]. Universidad de Chile.
- Vial, M. (1980, 27 marzo). ¿Vuelven las tomas? *Qué Pasa*, 10-11.
- Wilson, S. (1988). *La otra ciudad. De la marginalidad a la participación social*. Santiago: Ediar-ConoSur.
- Yañez, I. (2014). *Las construcciones sociales en la toma de Peñalolén (1999-2011)*. *Acción Memoria y Visualidad*. [Tesis de licenciatura]. Universidad de Chile.